Resolución del Pleno del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, con domicilio en Metepec, Estado de México, a treinta de abril de dos mil veinticinco.

**VISTO** el expediente formado con motivo del recurso de revisión **02029/INFOEM/IP/RR/2025**, interpuesto por **XXXX XXXXXXX XXXXXX XXXXXXX,** en lo sucesivola parte **Recurrente,** en contra de la respuesta a la solicitud de información con número de folio **00048/SECOGEM/IP/2025,** por parte de la **Secretaría de la Contraloría,** en lo sucesivo el **Sujeto Obligado,** se procede a dictar la presente resolución con base en los siguientes:

**I. A N T E C E D E N T E S**

**1. Solicitud de acceso a la información.** El **veintitrés de enero de dos mil veinticinco,** la parte **Recurrente** presentó la solicitud de acceso a la información pública ante el **Sujeto Obligado**, a través del Sistema de Acceso a la Información Mexiquense, en lo subsecuente el **SAIMEX,** mediante la cual requirió lo siguiente:

*“Declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el C. Ángel Adriel Negrete Avonce en su carácter de presidente municipal de Nextlalpan, Estado de México; Administración 2016 - 2018 y como Diputado del Distrito XXII Ojo de Agua de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México.****”*** *(sic)*

**Modalidad de Entrega:** a través del **SAIMEX.**

**2. Respuesta.** El **doce de febrero de dos mil veinticinco,** el **Sujeto Obligado** envió su respuesta a la solicitud de acceso a la información a través del SAIMEX, sustancialmente en los términos siguientes:

*“…ESTIMADO XXXXXXXXXXX, ESPERO SE ENCUENTRE DE MARAVILLA, LE INFORMO QUE EN ARCHIVOS ADJUNTOS ENCONTRARÁ EL OFICIO DE RESPUESTA FIRMADO POR EL ENCARGADO DE DESPACHO DE LA UNIDAD DE PREVENCIÓN DE LA CORRUPCIÓN Y RESPONSABLE DE LA UNIDAD DE TRANSPARENCIA, EL OFICIO DE RESPUESTA DEL SERVIDOR PÚBLICO HABILITADO QUE ATENDIÓ LA SOLICITUD, EL ACTA DE LA TERCERA SESIÓN EXTRAORDINARIA DEL COMITÉ DE TRANSPARENCIA DE LA SECRETARÍA DE LA CONTRALORÍA Y LA RESOLUCIÓN CORRESPONDIENTE. ¡QUE TENGA LINDA TARDE!...” (sic)*

El **Sujeto Obligado** adjuntó lo siguiente:

- Escrito del once de febrero de dos mil veinticinco, mediante el cual el Encargado de Despacho de la Unidad de Prevención de la Corrupción y Responsable de la Unidad de Transparencia, notificó a la persona solicitante la respuesta del servidor público habilitado que atendió la solicitud, así como el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia y la resolución correspondiente.

- Oficio número 21802000000000L-0053/2025, del treinta de enero de dos mil veinticinco, mediante el cual el Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas remite al Encargado de Despacho de la Unidad de Prevención de la Corrupción y Responsable de la Unidad de Transparencia, en sobre cerrado la respuesta proporcionada por el Encargado de Despacho de la Dirección de Registro de Declaraciones y de Sanciones.

- Oficio número 21803000030000L-0451/2025, del treinta de enero de dos mil veinticinco, mediante el cual en Encargado de Despacho de la Dirección de Registro de Declaraciones y de Sanciones remite al Encargado de Despacho de la Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas en sobre cerrado, la respuesta a la solicitud 00048/SECOGEM/IP/2025, donde señala que de los documentos solicitados de la persona servidora pública obligada no fueron localizados como versión pública las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los años 2016 a 2018, no obstante, se encontró información relacionada con las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses del servidor público referido, dentro del Sistema denominado “Integral de Manifestación de Bienes (SIMB), operado y administrado por la entonces Dirección General de Responsabilidades Administrativas, la cual fue presentada de conformidad con lo establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, vigente a partir del 19 de julio de 2017, consistente en las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses por Alta del año 2016, por Anualidad del año 2017, Inicial del año 2018 y por Conclusión del año 2018.

Asimismo, señaló que por disposición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se considera que la información contenida en la Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses se encuentra clasificada como confidencial, por tratarse de datos personales relacionados a una persona física, identificada o identificable: su vida afectiva, familiar, domicilio y situación patrimonial del servidor público, razón por la cual no puede hacerse pública hasta en tanto los Sujetos Obligados cuenten con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate, esto es, que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, previo y por escrito, por lo que los ex o servidores públicos la presentan confiando en que su información no será pública ni utilizada con un propósito incompatible con el que se haya especificado, por lo que a la fecha de contestación, la Unidad Administrativa no cuenta con documento escrito alguno en donde exista autorización previa y especifica de la persona servidora pública citada, en el que se haya otorgado un pronunciamiento de consentimiento expreso informado o autorización y/o determinación ratificada de forma personal ante dicha autoridad para hacer públicas sus Declaraciones de Situación Patrimonial, una vez que se hayan presentado, por lo que propuso la clasificación de las declaraciones presentadas de 2016 a 2018 de la persona referida, como información confidencial.

- Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, en la cual, como punto siete del orden del día, se sometió a consideración de los integrantes la propuesta de la clasificación de la información como confidencial, respecto de la solicitud de acceso a la información pública 00048/SECOGEM/IP/2025, aprobándose por unanimidad de votos la clasificación de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses por Alta del año 2016, por Anualidad del año 2017, Inicial del año 2018 y por Conclusión del año 2018 del servidor público referido.

- Resolución derivada del Acuerdo del Comité de Transparencia número ACT/SECOGEM/EXT/COMT/3ª/2025/SÉPTIMO, mediante el cual se exponen los argumentos presentados por el Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas, a fin de confirmar la clasificación de la información requerida en la solicitud 00048/SECOGEM/IP/2025 como confidencial.

**3. Interposición del recurso de revisión.** Inconforme con los términos de la respuesta emitida por parte del **Sujeto Obligado**, el **veinticinco de febrero de dos mil veinticinco,** la parte **Recurrente** interpuso el recurso de revisión a través de **SAIMEX,** en donde se manifestó de la siguiente manera:

**Acto impugnado:**

*“Declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el C. Ángel Adriel Negrete Avonce en su carácter de presidente municipal de Nextlalpan, Estado de México; Administración 2016 - 2018 y como Diputado del Distrito XXII Ojo de Agua de la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México.” (sic)*

**Y, Razones o motivos de inconformidad**:

*“No entregan información aduciendo que es confidencial y que se necesita del consentimiento del servidor público, quiero suponer que ese tipo de información debe de ser pública al tratarse de un servidor público en funciones.” (sic)*

**4. Turno.** De conformidad con el artículo 185 fracción I de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios vigente, el presente recurso de revisión se turnó por el sistema electrónico del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, a la Comisionada **Guadalupe Ramírez Peña,** a efecto de que analizara sobre su admisión o su desechamiento.

**5. Admisión del Recurso de revisión.** El **veintisiete de febrero de dos mil veinticinco,** este Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, admitió a trámite el recurso de revisión que ahora se resuelve, dando un plazo máximo de siete días hábiles para que las partes manifestaran lo que a su derecho resultara conveniente, ofrecieran pruebas, formularan alegatos y el **Sujeto Obligado** presentara su informe justificado.

**6. Manifestaciones**. El **once de marzo de dos mil veinticinco**, el **Sujeto Obligado** remitió, a través de SAIMEX, su informe justificado, mediante el cual ratificó en lo sustancial la respuesta emitida en primera instancia, sin embargo, se hizo del conocimiento de la parte **Recurrente,** con la finalidad de que manifestara lo que a su derecho estimara conveniente, siendo omisa en ejercer dicha prerrogativa.

**7. Cierre de instrucción.** Una vez transcurrido el periodo otorgado a las partes para realizar sus manifestaciones y no habiendo documentos que integrar al expediente, el **veinticuatro de marzo de dos mil veinticinco**, la Comisionada Ponente determinó el cierre de instrucción en términos de la fracción VI del artículo 185 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

**8**. **Ampliación del término para resolver**. El **veintiuno de abril de dos mil veinticinco**, se amplió el término para resolver el recurso de revisión en términos del artículo 181 párrafo tercero de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En razón de que fue debidamente sustanciado el expediente electrónico y no existe diligencia pendiente de desahogo, se emite la Resolución que conforme a Derecho proceda, de acuerdo con los siguientes:

**II. C O N S I D E R A N D O S**

**Primero. Competencia.** El Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios, es competente para conocer y resolver el presente recurso de revisión interpuesto por la parte recurrente, conforme a lo dispuesto en los artículos 6, apartado A de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos; 5 párrafos trigésimo séptimo, trigésimo octavo y trigésimo noveno, fracciones IV y V de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185, fracción I, 186 y 188 de la Ley Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; 9, fracciones I y XXIII y 11 del Reglamento Interior del Instituto de Transparencia, Acceso a la Información Pública y Protección de Datos Personales del Estado de México y Municipios.

**Segundo. Oportunidad y Procedibilidad del Recurso de Revisión**. Previo al estudio del fondo del asunto, se procede a analizar los requisitos de oportunidad y procedibilidad que debe reunir el recurso de revisión interpuesto, previstos en los artículos 178 y 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

El recurso de revisión fue interpuesto dentro del plazo de quince días hábiles, previsto en el artículo 178 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, toda vez que el **Sujeto Obligado** remitió la respuesta a la solicitud de información el día **doce de febrero de dos mil veinticinco,** mientras que el recurso de revisión interpuesto por la parte **Recurrente,** se tuvo por presentado el día **veinticinco de febrero de dos mil veinticinco,** esto es, al noveno día hábil posterior a aquel en el que tuvo conocimiento de las respuestas impugnadas. En este sentido, se concluye que el presente recurso de revisión se encuentra dentro de los márgenes temporales previstos en las disposiciones legales referidas.

Al mismo tiempo, por cuanto hace a la procedibilidad del recurso de revisión, una vez realizado el análisis del formato de interposición del recurso, se concluye la acreditación plena de los elementos formales precisados por el artículo 180 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en atención a que fue presentado mediante el formato visible en el SAIMEX.

Finalmente, se advierte que resulta procedente la interposición del recurso, según lo manifestado por la parte **Recurrente** en sus motivos de inconformidad, de acuerdo al artículo 179, fracción II del ordenamiento legal citado, que a la letra dice:

*“****Artículo 179.*** *El recurso de revisión es un medio de protección que la Ley otorga a los particulares, para hacer valer su derecho de acceso a la información pública, y procederá en contra de las siguientes causas:*

***...***

***II.*** *La clasificación de la información;*

**Tercero. Materia de la revisión.** De la revisión a las constancias y documentos que obran en el expediente electrónico se advierte, que el tema sobre el que este Organismo Garante de Transparencia y Acceso a la Información se pronunciará será: **verificar si la información proporcionada por el Sujeto Obligado es adecuada y suficiente para satisfacer el derecho de acceso a la información pública** de la parte **Recurrente**, o en su defecto, en caso de ser procedente, ordenar la entrega de información.

**Cuarto. Estudio del asunto.** En primer lugar, es conveniente mencionar que de conformidad con el artículo 4 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona, privilegiando el principio de máxima publicidad, como así lo establece dicha determinación, que a continuación se transcribe para un mejor entendimiento:

*“****Artículo 4****. El derecho humano de acceso a la información pública es la prerrogativa de las personas para buscar, difundir, investigar, recabar, recibir y solicitar información pública, sin necesidad de acreditar personalidad ni interés jurídico.*

***Toda la información generada, obtenida, adquirida, transformada, administrada o en posesión de los sujetos obligados es pública y accesible de manera permanente a cualquier persona****, en los términos y condiciones que se establezcan en los tratados internacionales de los que el Estado mexicano sea parte, en la Ley General, la presente Ley y demás disposiciones de la materia, privilegiando el principio de máxima publicidad de la información. Solo podrá ser clasificada excepcionalmente Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios 29 como reservada temporalmente por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por esta Ley.*

***Los sujetos obligados deben poner en práctica, políticas y programas de acceso a la información que se apeguen a criterios de publicidad, veracidad, oportunidad, precisión y suficiencia en beneficio de los solicitantes****.”*

Esto es, que los Sujetos Obligados tiene la obligación o deber de atender las solicitudes de acceso a la información pública que se les hagan de su conocimiento y proporcionar la información pública que obren en su poder conforme el estado que se encuentra y no hacer un procesamiento de la misma, ni presentarla conforme al interés del solicitante; como así lo establece el artículo 12 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, que a la letra dice:

***“Artículo 12.-*** *Quienes generen, recopilen, administren, manejen, procesen, archiven o conserven información pública serán responsables de la misma en los términos de las disposiciones jurídicas aplicables.*

***Los sujetos obligados sólo proporcionarán la información pública que se les requiera y que obre en sus archivos y en el estado en que ésta se encuentre****.* ***La obligación de proporcionar información no comprende el procesamiento de la misma, ni el presentarla conforme al interés del solicitante; no estarán obligados a generarla, resumirla, efectuar cálculos o practicar investigaciones.”***

Es decir, que todo sujeto obligado que genere, recopile, administre, procese, archive, posea o conserven, son responsables de la misma teniendo a su vez la obligación de proporcionar la información que se les requiera sin necesidad de resumirla, efectuar procedimientos para obtenerla, calcular y practicar investigaciones; en otras palabras, que los Sujetos Obligados sólo se concretaran a proporcionar la información solicitada que tengan en su poder en el estado que se encuentran, sin necesidad de concretarse al interés o términos específicos del solicitante.

Sirve de apoyo a lo anterior, el criterio orientador con clave de control SO/003/2017, emitido por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, que por rubro y texto, dispone lo siguiente:

*“****No existe obligación de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de acceso a la información.*** *Los artículos 129 de la Ley General de Transparencia y Acceso a la Información Pública y 130, párrafo cuarto, de la Ley Federal de Transparencia y Acceso a la Información Pública, señalan que los sujetos obligados deberán otorgar acceso a los documentos que se encuentren en sus archivos o que estén obligados a documentar, de acuerdo con sus facultades, competencias o funciones, conforme a las características físicas de la información o del lugar donde se encuentre. Por lo anterior, los sujetos obligados deben garantizar el derecho de acceso a la información del particular, proporcionando la información con la que cuentan en el formato en que la misma obre en sus archivos; sin necesidad de elaborar documentos ad hoc para atender las solicitudes de información.”*

En esa tesitura, el artículo 24 en su último párrafo de la Ley de la Materia, dispone que los Sujetos Obligados sólo proporcionarán la información pública que generen, administren o posean en el ejercicio de sus atribuciones; por consiguiente, la información pública se encuentra a disposición de cualquier persona, lo que implica que es deber de los Sujetos Obligados, garantizar el Derecho de Acceso a la Información Pública.

En conclusión, el derecho de acceso a la información pública, consiste en que la información solicitada conste en un documento en cualquiera de sus formas, a saber: expedientes, reportes, estudios, actas, resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los Sujetos Obligados; los que, podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico de conformidad con el artículo 3, fracción XI de la Ley de la materia, el cual señala lo siguiente:

*“****Artículo 3.*** *Para los efectos de la presente Ley se entenderá por:*

*…*

***XI. Documento:*** *Los expedientes, reportes, estudios, actas****,*** *resoluciones, oficios, correspondencia, acuerdos, directivas, directrices, circulares, contratos, convenios, instructivos, notas, memorandos, estadísticas o bien, cualquier otro registro que documente el ejercicio de las facultades, funciones y competencias de los sujetos obligados, sus servidores públicos e integrantes, sin importar su fuente o fecha de elaboración. Los documentos podrán estar en cualquier medio, sea escrito, impreso, sonoro, visual, electrónico, informático u holográfico…”*

Es aplicable, el criterio de interpretación en el orden administrativo número 0002-11, emitido por Acuerdo del Pleno del Instituto de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios; publicado en el Periódico Oficial del Gobierno del Estado Libre y Soberano de México “Gaceta del Gobierno”, el diecinueve de octubre de dos mil once, cuyo rubro y texto refieren lo siguiente:

**“*INFORMACIÓN PÚBLICA, CONCEPTO DE, EN MATERIA DE TRANSPARENCIA. INTERPRETACIÓN SISTEMÁTICA DE LOS ARTÍCULOS 2°, FRACCIÓN V, XV, Y XVI, 3°, 4°, 11 Y 41.*** *De conformidad con los artículos antes referidos, el derecho de acceso a la información pública, se define en cuanto a su alcance y resultado material, el acceso a los archivos, registros y documentos públicos, administrados, generados o en posesión de los órganos u organismos públicos, en virtud del ejercicio de sus funciones de derecho público, sin importar su fuente, soporte o fecha de elaboración.*

*En consecuencia el acceso a la información se refiere a que se cumplan cualquiera de los siguientes tres supuestos:*

*1) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea generada por los Sujetos Obligados;*

*2) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, sea administrada por los Sujetos Obligados, y*

*3) Que se trate de información registrada en cualquier soporte documental, que en ejercicio de las atribuciones conferidas, se encuentre en posesión de los Sujetos Obligados.”*

Lo anterior, siempre y cuando no se trate de información clasificada como reservada o confidencial, cuya difusión pueda lesionar el interés jurídicamente protegido por la Ley, producir un daño mayor que el interés de conocerse, o bien, generar un daño en los derechos de las personas, debiendo tener audacia los Sujetos Obligados para cuidar esta información a través del acuerdo clasificatorio del comité de transparencia y la versión pública que emita el servidor público habilitado de cada Sujeto Obligado; como así se establece en la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

En el mismo tenor, los artículos 6, apartado A, fracción I, de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos y 5, fracción I, de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establecen que toda la información en posesión de cualquier autoridad, entidad, órgano y organismos de los Poderes Ejecutivo, Legislativo y Judicial, órganos autónomos, partidos políticos, fideicomisos y fondos públicos estatales y municipales, así como del gobierno y de la administración pública municipal y sus organismos descentralizados, asimismo de cualquier persona física, jurídica colectiva o sindicato que reciba y ejerza recursos públicos o realice actos de autoridad en el ámbito estatal y municipal, es pública y sólo podrá ser reservada temporalmente por las razones previstas en la Constitución Federal por interés público y seguridad, en los términos que fijen las leyes de la materia.

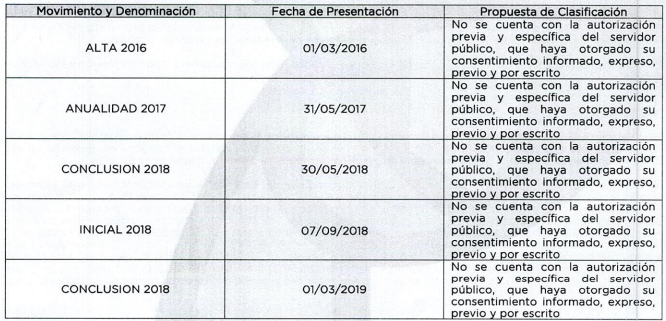
Ahora bien, del análisis de la solicitud de información, motivo del recurso de revisión que ahora se resuelve, se advierte que la parte **Recurrente** requirió al **Sujeto Obligado** le proporcione, información consistente en lo siguiente:

1. Declaraciones patrimoniales y de intereses presentadas por el servidor público referido en la solicitud

a. En su carácter de presidente municipal de Nextlalpan, Estado de México, durante la administración 2016-2018.

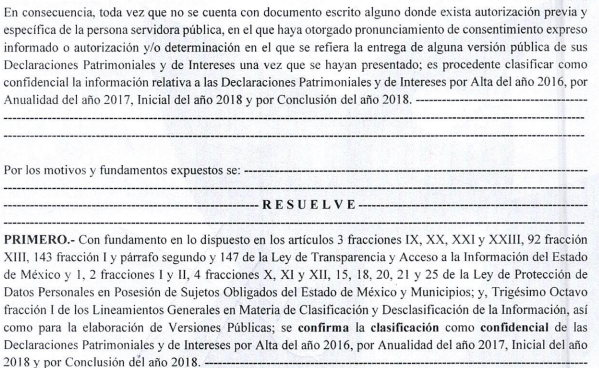
b. Como Diputado del Distrito XXII Ojo de Agua, en la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México.

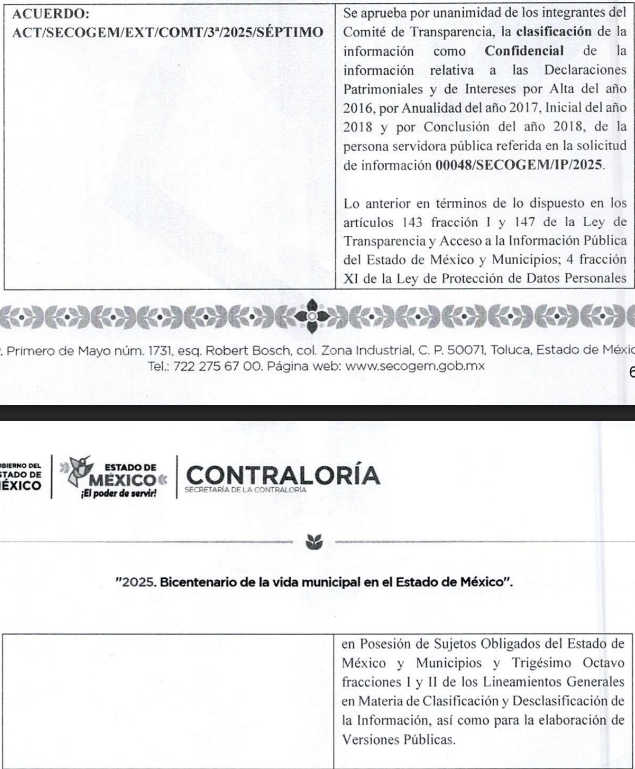
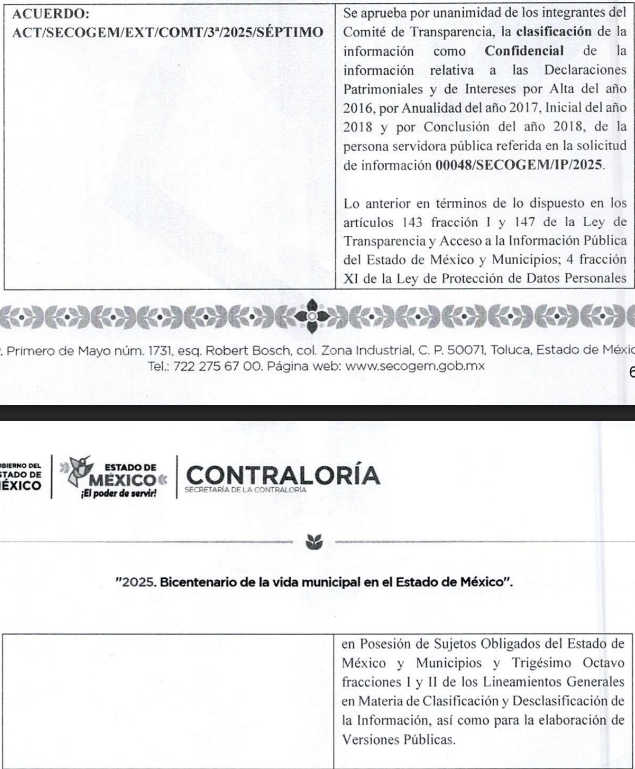
En respuesta, la Unidad de Transparencia hizo del conocimiento de la persona solicitante la información proporcionada por la Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas, a través de la Dirección de Registro de Declaraciones y de Sanciones, cuyo Encargado de Despacho manifestó, en lo medular que no se localizó la versión pública de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los años 2016 a 2018 del servidor público referido en la solicitud, sin embargo, en el Sistema Integral de Manifestación de Bienes, SIMB, se localizó información relacionada con las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses del servidor público en cuestión, la cual fue presentada de conformidad con lo establecido por la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, vigente a partir del 19 de julio de 2017, consistente en las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses por Alta del año 2016, por Anualidad del año 2017, Inicial del año 2018 y por Conclusión del año 2018, como se muestra en el siguiente cuadro:



Sin embargo, señaló que por disposición de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, se considera que la información contenida en la declaración de situación patrimonial y de intereses, se encuentra clasificada como confidencial, por tratarse de por tratarse de datos personales relacionados a una persona física, identificada o identificable: su vida afectiva, familiar, domicilio y situación patrimonial del servidor público, razón por la cual no puede hacerse pública hasta en tanto los Sujetos Obligados cuenten con la autorización previa y específica del servidor público de que se trate, esto es, que haya otorgado su consentimiento informado, expreso, previo y por escrito.

Y, finalmente precisó que a la fecha de contestación la Unidad Administrativa no cuenta en el asunto que se resuelve con documento escrito alguno en donde exista autorización previa y especifica de la persona servidora pública en cuestión, en el que se haya otorgado un pronunciamiento de consentimiento expreso informado o autorización y/o determinación ratificada de forma personal ante dicha autoridad para hacer públicas sus Declaraciones de Situación Patrimonial, una vez que se hayan presentado, y por consiguiente, se propuso la clasificación de las Declaraciones presentadas por la persona referida de 2016 a 2018, como información confidencial, la cual fue confirmada por el Comité de Transparencia como consta la Resolución derivada del Acuerdo del Comité de Transparencia número ACT/SECOGEM/EXT/COMT/3ª/2025/SÉPTIMO, aprobado en la Tercera Sesión Extraordinaria de dicho Comité, como se lee enseguida:





Al no estar conforme con lo anterior, la parte **Recurrente** presentó el recurso de revisión que se resuelve, por medio del cual refirió que no le fue entregada la información alegando que era confidencial, y que se necesitaba el consentimiento del servidor público en cuestión, sin embargo, a su parecer, dicha información debe ser pública por tratarse de un servidor público en funciones.

Atento a lo anterior, no pasa desapercibido para este Organismo Garante que el motivo de inconformidad alegado por la parte **Recurrente,** versa específicamente sobre a la clasificación de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses por Alta del año 2016, por Anualidad del año 2017, Inicial del año 2018 y por Conclusión del año 2018 del servidor público referido en la solicitud, que fue invocada por el **Sujeto Obligado,** tal y como se aprecia en las imágenes agregadas en la página anterior.

En este tenor, al no haber impugnado la respuesta del **Sujeto Obligado,** por lo que se refiere a las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses presentadas por el servidor público referido, como Diputado del Distrito XXII Ojo de Agua en la LXII Legislatura del Congreso del Estado de México, debe declararse consentida por lo que respecta a dicho punto, toda vez que al no haber realizado manifestaciones de inconformidad al respecto, no pueden producirse efectos jurídicos tendentes a revocar, confirmar o modificar el acto, pues en el caso concreto se infiere que la información proporcionada satisface la solicitud presentada respecto del requerimiento que no fue combatido.

Lo anterior es así, debido a que cuando la parte **Recurrente** impugna la respuesta del **Sujeto Obligado**, y éste no expresa razón o motivo de inconformidad en contra de todos los rubros solicitados, dichos rubros deben declararse atendidos, pues se entiende que ésta conforme con la información entregada al no contravenir la misma.

Sirve de apoyo lo plasmado en el criterio orientador con clave de control SO/001/2020, emitido por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información, y Protección de Datos Personales, INAI, que lleva por rubro y texto, lo siguiente:

*“****Actos consentidos tácitamente. Improcedencia de su análisis.*** *Si en su recurso de revisión, la persona recurrente no expresó inconformidad alguna con ciertas partes de la respuesta otorgada, se entienden tácitamente consentidas, por ende, no deben formar parte del estudio de fondo de la resolución que emite el Instituto.”*

Asimismo, resulta aplicable por analogía la tesis jurisprudencial número VI.3o.C. J/60, publicada en el Semanario Judicial de la Federación y su Gaceta bajo el número de registro 176,608 que a la letra dice:

***“ACTOS CONSENTIDOS. SON LOS QUE NO SE IMPUGNAN MEDIANTE EL RECURSO IDÓNEO.*** *Debe reputarse como consentido el acto que no se impugnó por el medio establecido por la ley, ya que si se hizo uso de otro no previsto por ella o si se hace una simple manifestación de inconformidad, tales actuaciones no producen efectos jurídicos tendientes a revocar, confirmar o modificar el acto reclamado en amparo, lo que significa consentimiento del mismo por falta de impugnación eficaz.”*

En consecuencia, se insiste, ante la falta de impugnación eficaz, el requerimiento debe declararse consentido por la persona solicitante, y por consiguiente, no es procedente el análisis de fondo en la resolución.

Durante el periodo de manifestaciones el **Sujeto Obligado** ratificó la respuesta emitida en primera instancia, mientras que la parte **Recurrente** fue omisa en hacer valer manifestaciones o rendir alegatos que conforme a derecho resultaran procedentes, por lo tanto se tiene por precluido su derecho.

Una vez establecidas las posturas de las partes, se procede al análisis del requerimiento de información combatido, así como la información proporcionada por el **Sujeto Obligado,** en contraposición con el motivo de inconformidad alegado por la parte **Recurrente,** con la finalidad de determinar si el Derecho de acceso de esta se satisfizo, o en su defecto, señalar los documentos que en el ejercicio de sus atribuciones pudo haber generado, y que, de manera enunciativa más no limitativa, pudieran colmar dicho derecho, en caso de ser procedente.

Ahora bien, en primer lugar, es de señalar que de la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado,** por conducto de la Dirección de Registro de Declaraciones y de Sanciones, adscrita a la Subsecretaria de Responsabilidades Administrativas, como el área competente para conocer de la información que es del interés de la persona solicitante de conformidad con el código estructural 21803000030000L del Manual General de Organización de la Secretaría de la Contraloría, se despende que este no niega la existencia de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses presentadas por el servidor público referido en la solicitud del periodo comprendido del 2016 a 2018, sino que el motivo por el cual se niega el acceso a dicha información lo es que ésta reviste el carácter de confidencial, por lo que es posible concluir que la información se generó y obra en sus archivos**,** siendo la clasificación y la inexistencia dos figuras que no pueden coexistir, como se desprende del criterio orientador con clave de control SO/012/2023, emitido por el entonces Instituto Nacional de Transparencia, Acceso a la Información y Protección de Datos Personales, INAI**,** el cual refiere lo siguiente:

***“Respuesta a solicitud de acceso. La clasificación y la inexistencia de información son conceptos que no pueden coexistir.*** *La inexistencia implica necesariamente que la información no se encuentra en los archivos de la autoridad, no obstante que la dependencia o entidad cuente con facultades para poseer dicha información. En este sentido, la inexistencia es una calidad que se atribuye a la información solicitada. Por su parte, la clasificación es el proceso mediante el cual el sujeto obligado determina que la información en su poder actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, por lo que se trata de una característica que adquiere la información contenida en un documento específico. Por lo anterior,* ***la clasificación y la inexistencia no coexisten entre sí, en virtud de que la clasificación de información implica invariablemente la existencia de un documento o documentos determinados, mientras que la inexistencia conlleva la ausencia de los mismos en los archivos de la dependencia o entidad de que se trate.”***

Por otro lado, por lo que se refiere a la materia de la solicitud es oportuno traer a colación lo dispuesto por el artículo 130 de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México, establece que los servidores públicos estarán obligados a presentar, bajo protesta de decir verdad, su declaración patrimonial.

En ese contexto, los artículos 3°, fracción VIII, 33 y 34 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que entró en vigencia a partir del treinta y uno de mayo de dos mil diecisiete, establece que estarán obligados a presentar las declaraciones de situación patrimonial y de intereses los servidores públicos, las cuales deberán presentarse de la siguiente manera:

* **Inicial:** Dentro de los sesenta días naturales siguientes al ingreso o reingreso al servicio público;
* **Modificación Patrimonial:** Durante el mes de mayo de dos cada año, y
* **Conclusión:** Dentro de los sesenta días naturales siguientes a la conclusión del cargo.

Por lo que se refiere a la publicidad de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses, el artículo 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, precisa lo siguiente:

***“Artículo 29.*** *Las declaraciones patrimoniales y de intereses* ***serán públicas salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por la Constitución****. Para tal efecto, el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana,* ***emitirá los formatos respectivos****, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.”*

En el mismo tenor, el artículo 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, establece lo siguiente:

***“Artículo 30.******Las declaraciones patrimonial y de intereses****,* ***serán públicas******salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada o los datos personales protegidos por las Constituciones federal y local****. Para tal efecto,* ***el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, emitirá los formatos respectivos****, en apego a las leyes y ordenamientos en la materia, garantizando que los rubros que pudieran afectar los derechos aludidos queden en resguardo de las autoridades competentes.”*

De los artículos citados, se logra advertir que **las declaraciones de situación patrimonial y de intereses serán públicas,** salvo los rubros cuya publicidad pueda afectar la vida privada y los datos personales; para lo cual, **el Comité Coordinador, a propuesta del Comité de Participación Ciudadana, deberá emitir los formatos respectivos para realizar las versiones públicas.**

Por consiguiente, **la exigencia al cumplimiento a la obligación de publicitar las Declaraciones de situación patrimonial y de intereses de los servidores públicos, quedó supeditado a la emisión de los formatos respectivos, por parte del Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción y Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción,** los cuales deben garantizar que la información que afecta la vida privada o los datos personales de los servidores públicos quede en resguardo de las autoridades competentes, es decir, que no sea de conocimiento público para no vulnerar su esfera más íntima de privacidad, y hasta entonces, la obligación de los servidores públicos de presentar sus declaraciones patrimonial y de intereses, debió cumplirse mediante los formatos que se habían utilizado para tal efecto hasta la entrada en vigor de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios.

Lo anterior encuentra sustento en el Transitorio Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, respectivamente, que en su parte conducente, disponen lo siguiente:

*Ley General de Responsabilidades Administrativas*

***“Tercero.*** *…*

*…*

***El cumplimiento de las obligaciones*** *previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor,* ***serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia****.*

*…*

*Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y* ***hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos******para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses****,* ***los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el ámbito federal.”***

*Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción*

***“Tercero.*** *…*

*…*

*El cumplimiento de las obligaciones previstas en la Ley General de Responsabilidades Administrativas, una vez que ésta entre en vigor,* ***serán exigibles, en lo que resulte aplicable, hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción, de conformidad con la ley de la materia, emita los lineamientos, criterios y demás resoluciones conducentes de su competencia.****...*

*Una vez en vigor la Ley General de Responsabilidades Administrativas y* ***hasta en tanto el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción determina los formatos para la presentación de las declaraciones patrimonial y de intereses, los servidores públicos de todos los órdenes de gobierno presentarán sus declaraciones en los formatos que a la entrada en vigor de la referida Ley General, se utilicen en el ámbito federal.***

…”

Así como en elTransitorio Noveno de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, que en su parte conducente establece lo siguiente:

***“NOVENO.*** *…*

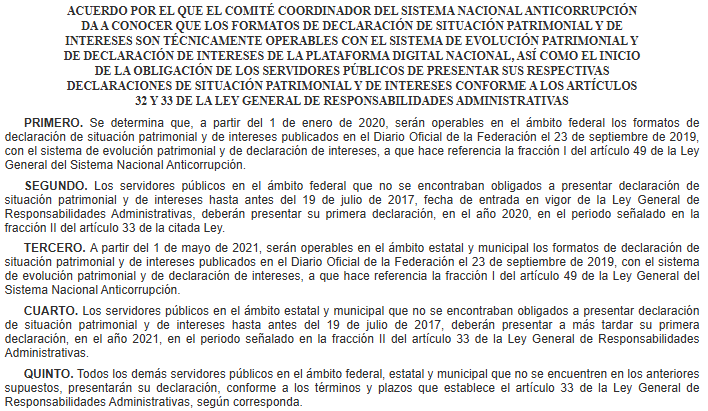
*…*

***Hasta en tanto******el Comité Coordinador del Sistema Estatal Anticorrupción****,* ***determina los formatos para la presentación de las declaraciones******patrimonial y de intereses,******los servidores públicos estatales y municipales, presentarán sus declaraciones en los formatos que, a la entrada en vigor del presente Decreto, se utilicen en la Entidad.”***

Con base en lo previo, se puede conjeturar que **las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses serán públicas en el momento en el que el Comité Coordinador de a conocer de manera oficial los formatos que se aplicarán para la presentación de dichas Declaraciones y éstos se encuentren operables, es decir, que se utilicen para recabar la información de los servidores públicos**; lo anterior es así, pues mientras no se aprobaran dichos formatos, los servidores públicos presentarían sus declaraciones en los formatos que se encontrarán en vigor, los cuales, cabe mencionar, no se encontraban debidamente integrados y segmentados a fin de separar la información que es de interés público, de aquella que concierne exclusivamente a su titular, por tratarse de datos personales o información de su vida privada.

En ese contexto, el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación, el **Acuerdo por el que se modifican los Anexos Primero y Segundo del Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción emite el formato de declaraciones: de situación patrimonial y de intereses; y expide las normas e instructivo para su llenado y presentación**, consultable en la dirección electrónica <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5573194&fecha=23/09/2019#gsc.tab=0>, el cual **establece en el ANEXO PRIMERO los formatos para la presentación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses**, por cada tipo de declaración esto es: inicial, modificación y conclusión; mientras que el ANEXO SEGUNDO corresponde a las Normas e Instructivo para el llenado de los formatos y presentación de las declaraciones.

Posteriormente, el veinticuatro de diciembre de dos mil diecinueve, se publicó en el Diario Oficial de la Federación el **Acuerdo por el que el Comité Coordinador del Sistema Nacional Anticorrupción da a conocer que los formatos de declaración de situación patrimonial y de intereses son técnicamente operables con el Sistema de Evolución Patrimonial y de Declaración de Intereses de la Plataforma Digital Nacional**, **así como el inicio de la obligación de los servidores públicos de presentar sus respectivas declaraciones de situación patrimonial y de intereses** **conforme a los artículos 32 y 33 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas**, consultable en la dirección electrónica <https://www.dof.gob.mx/nota_detalle.php?codigo=5582735&fecha=24/12/2019#gsc.tab=0>, el cual establece en sus numerales Tercero y Cuarto que **a partir del primero de mayo de dos mil veintiuno,** **serán operables en el ámbito estatal y municipal los formatos de declaración patrimonial y de intereses publicados en el Diario Oficial de la Federación el veintitrés de septiembre de dos mil diecinueve;** por lo que, los servidores públicos debían presentar sus declaraciones respectivas en estos formatos a partir del año 2021, tal como se lee a continuación:



De lo hasta aquí expuesto, se logra vislumbrar que a **partir del primero de mayo de dos mil veintiuno,** **se empezaron aplicar los nuevos formatos para la presentación de las declaraciones de situación patrimonial y de intereses**, los cuales **establecen qué datos son de naturaleza pública y cuáles son confidenciales**, para su publicación en versión pública, y con ello dar cumplimiento a lo establecido los artículos 29 de la Ley General de Responsabilidades Administrativas y 30 de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, citados con antelación.

Una vez acotado lo anterior, cobra relevancia lo manifestado por el servidor público habilitado de la Dirección de Registro de Declaraciones y de Sanciones, quien en respuesta refirió que no se localizó la versión pública de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los años 2016 a 2018 del servidor público referido en la solicitud, razón por la cual se encontraba impedido para atender de manera favorable la solicitud, ya que si bien, localizó en el Sistema Integral de Manifestación de Bienes, SIMB, las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses por Alta del año 2016, por Anualidad del año 2017, Inicial del año 2018 y por Conclusión del año 2018, del servidor público en cuestión, las mismas fueron presentadas conforme a lo establecido en la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios vigente a partir del 19 de julio de 2017, lo cual se traduce en que **dichas Declaraciones se presentaron a través de los formatos que se encontraban vigentes o que eran utilizados en la entidad** para dar cumplimiento a la obligación prevista en los artículos 33 y 34 del referido ordenamiento, dado que **los formatos aprobados por el Comité Coordinador para la presentación de las Declaraciones de situación patrimonial y de intereses**, los cuales se insiste, establecen qué datos son de naturaleza pública y cuáles son confidenciales para su publicación en versión pública, **empezaron a aplicarse a partir del uno de mayo de dos mil veintiuno,** y por tanto, a partir de dicha fecha la información es susceptible de publicitarse, en versión pública.

En consecuencia, dado que **las Declaraciones de situación patrimonial y de intereses que obran en poder del Sujeto Obligado se presentaron previo a la operatividad de los formatos aprobados por el Comité Coordinador**, es evidente que no se encuentra obligado a hacer públicos dichos documentos, bajo el amparo de lo establecido en los Transitorios Tercero de la Ley General de Responsabilidades Administrativas, y de la Ley General del Sistema Nacional Anticorrupción, respectivamente, así como el Transitorio Noveno de la Ley de Responsabilidades Administrativas del Estado de México y Municipios, previamente citados.

Por lo tanto, al contener las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, datos personales, así como información relacionada con su vida afectiva, familiar, domicilio, y patrimonio del servidor público en cuestión y haberse presentado mediante formatos que no integran y segmentan debidamente dicha información, no puede hacerse de conocimiento público, sin el consentimiento expreso de su titular, por tratarse de información que reviste el carácter de confidencial.

Lo anterior en términos de los artículos 92, fracción XIII, 147 y 148, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

***“Artículo 92.*** *Los sujetos obligados deberán poner a disposición del público de manera permanente y actualizada de forma sencilla, precisa y entendible, en los respectivos medios electrónicos, de acuerdo con sus facultades, atribuciones, funciones u objeto social, según corresponda, la información, por lo menos, de los temas, documentos y políticas que a continuación se señalan:*

*...*

***XIII.******La información en versión pública de las declaraciones patrimoniales y de intereses de los servidores públicos que así lo determinen****, en los sistemas habilitados para ello, de acuerdo a la normatividad aplicable;”*

***...***

***Artículo 147.*** *Para que los sujetos obligados puedan permitir el acceso a información confidencial* ***requieren obtener el consentimiento*** *de los particulares titulares de la información.*

*“****Artículo 148.*** *No se requerirá el consentimiento del titular de la información confidencial cuando:*

*...*

***II.*** *Por Ley tenga el carácter de pública;”*

Para lo cual se reitera que la obligatoriedad de la publicidad de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses de los servidores públicos, no fue exigible por Ley sino hasta la aprobación de los formatos por el Comité Coordinador, y la determinación de su operatividad, siendo esto a partir del primero de mayo de dos mil veintiuno.

Asimismo, no se pasa por alto que en el presente asunto el Encargado de Despacho de la Dirección de Registro de Declaraciones y de Sanciones manifestó que no se contaba con documento escrito alguno en donde exista autorización previa y especifica de la persona servidora pública referida, en el que haya otorgado un pronunciamiento de consentimiento expreso informado o autorización y/o determinación ratificada de forma personal ante dicha autoridad para hacer públicas sus Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses, una vez que se hayan presentado, por lo tanto, se concluye que el **Sujeto Obligado** no se encuentra en posibilidad de hacer públicas las Declaraciones del servidor público en cuestión.

Atento a lo anterior, es oportuno mencionar que el derecho de acceso a la información puede ser restringido de manera excepcional por razones de interés público, en los términos de las causas legítimas y estrictamente necesarias previstas por la Ley, a través de la clasificación de la información como confidencial o reservada para permitir el acceso, como se desprende del artículo 91 de la Ley de la Materia que es del tenor literal siguiente:

***“Artículo 91.*** *El acceso a la información pública será restringido excepcionalmente, cuando ésta sea clasificada como reservada o confidencial.”*

Asimismo, es importante mencionar que la restricción al derecho de acceso a la información implica necesariamente una clasificación, la cual debe entenderse como el proceso mediante el cual el Sujeto Obligado determina que la información en su poder, actualiza alguno de los supuestos de reserva o confidencialidad, de conformidad con las normas aplicables.

Así, se entiende como información reservada aquella que se clasifica de manera temporal cuya divulgación pueda causar algún daño; y como información confidencial, la relacionada con los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponde a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos, así como la información privada contenida en documentos públicos o privados que refiera a la vida privada y/o los datos personales, que no son de acceso público.

En lo que concierne a la información clasificada como confidencial, para que el acceso a la información pública pueda ser restringido, se deben actualizar los supuestos establecidos en el artículo 143 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

*“****Artículo 143.*** *Para los efectos de esta Ley se considera información confidencial, la clasificada como tal, de manera permanente, por su naturaleza, cuando:*

***I****. Se refiera a la información privada y los datos personales concernientes a una persona física o jurídico colectiva identificada o identificable;*

***II.*** *Los secretos bancario, fiduciario, industrial, comercial, fiscal, bursátil y postal, cuya titularidad corresponda a particulares, sujetos de derecho internacional o a sujetos obligados cuando no involucren el ejercicio de recursos públicos; y*

***III.*** *La que presenten los particulares a los sujetos obligados, de conformidad con lo dispuesto por las leyes o los tratados internacionales.*

*La información confidencial no estará sujeta a temporalidad alguna y sólo podrán tener acceso a ella los titulares de la misma, sus representantes y los servidores públicos facultados para ello.*

*No se considerará confidencial la información que se encuentre en los registros públicos o en fuentes de acceso público, ni tampoco la que sea considerada por la presente ley como información pública.”*

De este modo, conforme al artículo 132 de la Ley en la Materia Local, para clasificar la información se debe de atender a lo dispuesto por la normativa y aplicar, de manera estricta, las excepciones del derecho de acceso a la información y sólo podrán invocarlas cuando acrediten su procedencia, debiendo clasificar la información en el momento en que:

1. Se reciba una solicitud de acceso a la información;
2. Se determine mediante resolución de autoridad competente; y/o
3. Se generen versiones públicas para dar cumplimiento a las obligaciones de transparencia previstas en la Ley.

Además, es de precisar que la clasificación de la información no se da por el simple mandato de la Ley, sino que cuando se clasifique algún documento o información, ya sea todo o en parte, es necesario que se atienda lo dispuesto por la Ley de la materia, siendo que dicha clasificación es un trabajo en conjunto tanto de los Servidores Públicos Habilitados, de las Unidades de Transparencia y del Comité de Transparencia del Sujeto Obligado, teniendo el deber los primeros de ellos de presentar ante la Unidad de Transparencia la propuesta de la clasificación de la información, para que luego esta se presente ante al Comité de Transparencia de así resultar procedente el proyecto de clasificación de la información y que finalmente sea este último quien apruebe, modifique o revoque la misma, como se desprende de los artículos 59 fracción V, 53 fracción X, y 49 fracciones II y VIII de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

*“****Artículo 49****. Los* ***Comités de Transparencia*** *tendrán las siguientes atribuciones:*

*...*

***II.*** *Confirmar, modificar o revocar las determinaciones que en materia de ampliación del plazo de respuesta, clasificación de la información y declaración de inexistencia o de incompetencia realicen los titulares de las áreas de los sujetos obligados;*

*...*

***VIII****. Aprobar, modificar o revocar la clasificación de la información*

***...***

***Artículo 53****. Las* ***Unidades de Transparencia*** *tendrán las siguientes funciones:*

*...*

***X.*** *Presentar ante el Comité, el proyecto de clasificación de información;*

***...***

***Artículo 59****. Los* ***servidores públicos habilitados*** *tendrán las funciones siguientes:*

*...*

***V.*** *Integrar y presentar al responsable de la Unidad de Transparencia la propuesta de clasificación de información, la cual tendrá los fundamentos y argumentos en que se basa dicha propuesta;”*

En el caso que nos ocupa, como se advierte en las constancias que obran en el expediente electrónico, a través del oficio número 21803000030000L-0451/2025, el Encargado de Despacho de la Dirección de Registro de Declaraciones y de Sanciones propuso la clasificación de las Declaración de Situación Patrimonial y de Intereses por Alta del año 2016, por Anualidad del año 2017, Inicial del año 2018 y por Conclusión del año 2018, como información confidencial, al contener datos personales, vida afectiva, familiar, domicilio y situación patrimonial del servidor público, sin contar con la autorización previa y especifica del servidor público para hacer pública dicha información una vez presentada.

Dicha propuesta se sometió a consideración del Comité de Transparencia en la Tercera Sesión Extraordinaria celebrada el diez de febrero de dos mil veinticinco, donde se aprobó, por unanimidad de votos de los integrantes, la clasificación de las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses por Alta del año 2016, por Anualidad del año 2017, Inicial del año 2018 y por Conclusión del año 2018 del servidor público referido, en términos de los artículos 143, fracción I y 147 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, y 4, fracción XI de la Ley de Protección de Datos Personales en Posesión de Sujetos Obligados del Estado de México y Municipios, así como el Lineamiento Trigésimo Octavo, fracciones I y II de los Lineamientos Generales en Materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, vigentes a la fecha de presentación de la solicitud.

En este orden de ideas, derivado del análisis realizado en la Resolución derivada del Acuerdo del Comité de Transparencia número ACT/SECOGEM/EXT/COMT/3ª/2025/SÉPTIMO, mediante el cual se exponen los argumentos presentados por el Encargado de Despacho de la Subsecretaría de Responsabilidades Administrativas, a fin de confirmar la clasificación de la información requerida en la solicitud 00048/SECOGEM/IP/2025 como confidencial, así como el Acta de la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, se concluye que el **Sujeto Obligado** cumplió con las formalidades previstas en el artículo 168 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, así como los Lineamientos Octavo, Quincuagésimo primero, párrafo primero, y Quincuagésimo cuarto de los Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas, vigentes a la fecha de presentación de la solicitud, a saber:

*Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios*

*“****Artículo 168****. En caso de que los sujetos obligados consideren que los documentos o la información deban ser clasificados, se sujetará a lo siguiente:*

***I.*** *El Área deberá remitir la solicitud,* ***así como un escrito en el que funde y motive la clasificación al Comité de Transparencia****, mismo que deberá resolver para:*

***a)******Confirmar la clasificación****;*

***b)******Modificar. la clasificación y otorgar total o parcialmente el acceso a la informació****n; y*

***c)*** *Revocar la clasificación y conceder el acceso a la información.*

***II****. El Comité de Transparencia podrá tener acceso a la información que esté en poder del Área correspondiente, de la cual se haya solicitado su clasificación; y*

***III****. La resolución del Comité de Transparencia será notificada al interesado en el plazo de respuesta a la solicitud que establece esta Ley.”*

*Lineamientos Generales en materia de Clasificación y Desclasificación de la Información, así como para la elaboración de Versiones Públicas*

“***Octavo****. Para fundar la clasificación de la información* ***se debe señalar el artículo, fracción, inciso, párrafo o numeral de la ley o tratado internacional suscrito por el Estado mexicano que expresamente le otorga el carácter de reservada o confidencial.***

*Para motivar la clasificación* ***se deberán señalar las razones o circunstancias especiales que lo llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento.***

*En caso de referirse a información reservada, la motivación de la clasificación también deberá comprender las circunstancias que justifican el establecimiento de determinado plazo de reserva.*

*Tratándose de información clasificada como confidencial respecto de la cual se haya determinado su conservación permanente por tener valor histórico, ésta conservará tal carácter de conformidad con la normativa aplicable en materia de archivos.*

*Los documentos contenidos en los archivos históricos y los identificados como históricos confidenciales no serán susceptibles de clasificación como reservados.*

*...*

***Quincuagésimo primero.*** *Toda acta del Comité de Transparencia deberá contener:*

***I.*** *El número de sesión y fecha;*

***II****. El nombre del área que solicitó la clasificación de información;*

***III****. La fundamentación legal y motivación correspondiente;*

***IV****. La resolución o resoluciones aprobadas; y*

***V****. La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia.*

...

***Quincuagésimo cuarto.*** *Cuando el Comité de Transparencia confirme la clasificación de documentos reservados y/o confidenciales, sea total o parcialmente; se deberá anexar al expediente la resolución que determinó la clasificación o, en su defecto, identificar en la carátula del expediente del cual formen parte, la fecha y sesión del Comité de Transparencia en la que se confirmó dicha clasificación.****“***

Para un mejor entendimiento, a continuación se analiza el Acuerdo, así como la Resolución mediante la cual el **Sujeto Obligado** sustenta la clasificación de las Declaraciones de Situación Patrimonial y de Intereses por Alta del año 2016, por Anualidad del año 2017, Inicial del año 2018 y por Conclusión del año 2018 del servidor público referido, como información confidencial en su totalidad:

|  |  |  |
| --- | --- | --- |
| **REQUISITO** | **ACUERDO** | **¿CUMPLE?** |
| Número de Sesión y fecha |  | **SI** |
| Nombre del área que solicitó la clasificación de la información |  | **SI** |
| Fundamentación legal y motivación correspondiente | [Se transcriben] | **SI** |
| La resolución o resoluciones aprobadas |  | **SI** |
| Número de acuerdo emitido |  | **SI** |
| La rúbrica o firma digital de cada integrante del Comité de Transparencia |  | **SI** |

Como se logra vislumbrar, el acuerdo mediante el cual el **Sujeto Obligado** clasificó como confidencial en su totalidad la información relativa a las Declaraciones Patrimoniales y de Intereses por Alta del año 2016, por Anualidad del año 2017, Inicial del año 2018 y por Conclusión del año 2018, cumple con la totalidad de los elementos que la normativita estipula, al contener el número y fecha de la sesión, siendo esta la Tercera Sesión Extraordinaria del Comité de Transparencia, celebrada el diez de febrero de dos mil veinticinco; hace referencia a la Subdirección de Responsabilidades Administrativas como el área que solicitó la clasificación; asimismo, a través de la Resolución se exponen de manera fundada y motivada las razones por las cuales la información reviste el carácter de confidencial, toda vez que se señalan los artículos y fracción que expresamente le otorga dicho carácter, y de igual forma señala las razones o circunstancias especiales que llevaron a concluir que el caso particular se ajusta al supuesto previsto por la norma legal invocada como fundamento; contiene la resolución aprobada y el número del acuerdo del Comité de Transparencia aprobó la clasificación de la información como confidencial, y, finalmente, se advierte la firma de los servidores públicos que integran el Comité de Transparencia, así como de la persona servidora pública encargada de la protección de datos personales al tratarse de una cuestión relacionada con dicha materia, en términos del artículo 46, párrafos primero y segundo de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, a saber:

***“Artículo 46.*** *Los sujetos obligados integrarán sus Comités de Transparencia de la siguiente forma:*

***I****. El titular de la unidad de transparencia;*

***II****. El responsable del área coordinadora de archivos o equivalente; y*

***III****. El titular del órgano de control interno o equivalente.*

*También estará integrado por el servidor público encargado de la protección de los datos personales cuando sesione para cuestiones relacionadas con esta materia.”*

Derivado de lo expuesto, se concluye que los motivos de inconformidad de la parte **Recurrente** devienen infundados, siendo procedente *Confirmar* la respuesta proporcionada por el **Sujeto Obligado** en términos del artículo 186, fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios.

Así, con fundamento en lo prescrito en los artículos 5 párrafos trigésimo séptimo, trigésimo octavo y trigésimo noveno de la Constitución Política del Estado Libre y Soberano de México; 2, fracción II; 29, 36 fracciones I y II; 176, 178, 181, 185 y 186 fracción II de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, este Pleno:

**III. R E S U E L V E**

**Primero.** Son **infundadas** las razones o motivos de inconformidad hechos valer por la parte **Recurrente** en el recurso de revisión **02029/INFOEM/IP/RR/2025**, por lo que, en términos de los argumentos de derecho señalados en el considerando **Cuarto**, se **Confirma** la respuesta del **Sujeto Obligado**.

**Segundo. Notifíquese,** vía **SAIMEX,** al Titular de la Unidad de Transparencia del **Sujeto Obligado** para su conocimiento, la presente resolución.

**Tercero. Notifíquese,** vía **SAIMEX,** a la parte **Recurrente** la presente resolución, así como, que de conformidad con lo establecido en el artículo 196 de la Ley de Transparencia y Acceso a la Información Pública del Estado de México y Municipios, en caso de que considere que le causa algún perjuicio podrá impugnarla vía Juicio de Amparo en los términos de las leyes aplicables.

ASÍ LO RESUELVE, POR MAYORÍA DE VOTOS, EL PLENO DEL INSTITUTO DE TRANSPARENCIA, ACCESO A LA INFORMACIÓN PÚBLICA Y PROTECCIÓN DE DATOS PERSONALES DEL ESTADO DE MÉXICO Y MUNICIPIOS, CONFORMADO POR LOS COMISIONADOS JOSÉ MARTÍNEZ VILCHIS, MARÍA DEL ROSARIO MEJÍA AYALA, SHARON CRISTINA MORALES MARTÍNEZ, LUIS GUSTAVO PARRA NORIEGA (EMITIEDO VOTO DISIDENTE), Y GUADALUPE RAMÍREZ PEÑA, EN LA DÉCIMA QUINTA SESIÓN ORDINARIA CELEBRADA EL TREINTA DE ABRIL DE DOS MIL VEINTICINCO, ANTE EL SECRETARIO TÉCNICO DEL PLENO ALEXIS TAPIA RAMÍREZ.